El conflicto entre el gobierno de Evo Morales y las regiones de la Media Luna es uno de los episodios más complejos y tensos en la historia reciente de Bolivia. Cuando Morales asumió la presidencia en 2006, su ascenso marcó un cambio histórico: por primera vez, un líder indígena llegaba al poder en un país que había estado marcado por siglos de exclusión y discriminación hacia sus pueblos originarios. Morales presentó un programa de reformas profundas con el objetivo de redistribuir la riqueza, nacionalizar recursos estratégicos y empoderar a las comunidades indígenas. Su discurso se centraba en la justicia social, el fin del neoliberalismo y la creación de un Estado Plurinacional que reconociera las diversas identidades culturales y étnicas del país.
Sin embargo, estas políticas encontraron una fuerte oposición en las regiones orientales conocidas como la Media Luna, que incluían Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Estas regiones, caracterizadas por su desarrollo económico basado en la agroindustria, la ganadería y la explotación de hidrocarburos, habían experimentado un crecimiento sostenido que les otorgaba un peso considerable dentro de la economía nacional. Santa Cruz, en particular, se había consolidado como el motor económico del país. La élite económica y política de la Media Luna, compuesta principalmente por empresarios agroindustriales, comerciantes y ganaderos, defendía un modelo económico más liberal y descentralizado, y veía con recelo las políticas centralistas de Morales.

La llegada de Morales al poder agudizó estas tensiones preexistentes. Las políticas de nacionalización de los hidrocarburos y otros sectores estratégicos fueron vistas por la Media Luna como un intento de quitarles el control sobre los recursos que consideraban propios. Por otro lado, la reforma agraria impulsada por el gobierno, que buscaba redistribuir tierras a favor de comunidades campesinas e indígenas, fue percibida como una amenaza directa a los grandes terratenientes de la región.

La tensión aumentó en 2008, cuando las regiones de la Media Luna impulsaron referendos para la aprobación de estatutos autonómicos, buscando mayor control sobre sus recursos y competencias. Estos referendos, aunque no fueron reconocidos por el gobierno central ni por la comunidad internacional, se llevaron a cabo en un ambiente de alta polarización. Los resultados, que mostraban un apoyo abrumador a la autonomía, fueron rechazados por el gobierno de Morales, que los calificó de ilegales y como parte de un plan separatista.

El conflicto llegó a un punto crítico con la Masacre de Porvenir en septiembre de 2008, en la región de Pando. En este trágico episodio, al menos 13 campesinos

simpatizantes del gobierno fueron asesinados durante un enfrentamiento con grupos opositores. Este evento llevó al gobierno a declarar estado de sitio en Pando y a intensificar la militarización en la región. La figura del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, se convirtió en un símbolo del enfrentamiento, siendo acusado de organizar la masacre y posteriormente detenido.

La situación de crisis escaló aún más con el Caso Terrorismo de 2009. En abril de ese año, un operativo policial en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz, resultó en la muerte de tres extranjeros, a quienes el gobierno acusó de estar involucrados en un complot para desestabilizar al país y dividirlo territorialmente. Según la versión oficial, estos individuos, junto con otros sospechosos, estaban planeando un atentado contra Morales y líderes políticos aliados al gobierno. Este caso generó controversia y debates sobre la legitimidad del operativo y las verdaderas intenciones detrás de las acusaciones de terrorismo. Para muchos en la Media Luna, el operativo fue percibido como un acto de represión contra el movimiento autonomista.

En medio de estas tensiones, el gobierno avanzó con su proyecto de redacción de una nueva Constitución, que fue sometida a referendo en 2009. La nueva Constitución reconoció a Bolivia como un Estado Plurinacional y sentó las bases para un modelo de desarrollo que priorizaba la redistribución de la riqueza, el fortalecimiento del Estado y la inclusión de los sectores históricamente marginados. Aunque las regiones de la Media Luna participaron en el proceso constitucional, muchas de sus demandas autonomistas fueron limitadas o reinterpretadas dentro del marco plurinacional.

El conflicto entre el gobierno de Morales y la Media Luna dejó profundas huellas en el tejido político y social del país. Por un lado, el gobierno logró consolidar su proyecto político y mantener la unidad territorial, debilitando las aspiraciones separatistas. Por otro lado, las regiones orientales mantuvieron su posición como un bloque de oposición, aunque con un poder político reducido tras la neutralización de varios de sus líderes.

Este periodo de la historia boliviana refleja las complejidades de un país marcado por profundas desigualdades regionales, económicas y culturales. Las tensiones entre un gobierno con una agenda transformadora y las élites regionales que buscaban preservar sus intereses económicos y políticos evidenciaron la dificultad de construir consensos en un contexto de alta polarización. Aunque el conflicto no desembocó en una ruptura definitiva, dejó un legado de desconfianza y división que sigue presente en la política boliviana.